



Comisión de Inclusión
Social, Democracia
Participativa y Derechos
Humanos de CGLU

CIUDADES POR LOS DERECHOS

Documento político

INFORME DE LA COMISIÓN EN LA CONFERENCIA CIUDADES Y MIGRACIONES DE MECHELEN

Los gobiernos locales se movilizan para defender una gobernanza global de las migraciones basada en los derechos humanos

En el marco de la Conferencia sobre Ciudades y Migraciones que tuvo lugar el 16 y 17 de noviembre de 2017 en Malinas, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU organizó un evento paralelo sobre “Movilidad Humana y Derecho a la Ciudad”, y coordinó la sesión del programa oficial “Derechos Humanos de las personas migrantes”

En septiembre de 2016, los Estados de Naciones Unidas adoptaron la [Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes](#), en la que piden la celebración de una conferencia internacional sobre migración en 2018 para acordar un [Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular](#). Un mes más tarde, se aprobó la [Nueva Agenda Urbana](#) en la conferencia Hábitat III (Quito, octubre 2016), en la que se integra a la migración como elemento estructural de las ciudades y se invitan a los Estados a garantizar los derechos humanos universales de todos los habitantes de las ciudades y de los asentamientos humanos, independientemente de su situación administrativa.



En este contexto, la [Conferencia Global sobre Ciudades y Migraciones](#), celebrada en Malinas (Bélgica) a iniciativa de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de CGLU y del Ayuntamiento de Malinas, tuvo como objetivo consolidar la contribución de los gobiernos locales a la elaboración del Pacto Global. En ella se fortaleció la narrativa de las migraciones como oportunidad, y [la declaración adoptada](#) llama a tomar en cuenta la voz de los gobiernos locales en el pacto global sobre migraciones y a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, asegurando su acceso a los servicios básicos, aspecto esencial para una gestión sostenible de los flujos migratorios.

Los participantes de la conferencia llamaron a reforzar las alianzas entre gobiernos locales, sociedad civil y academia para contribuir a la elaboración de una gobernanza global de las migraciones que respete, garantice y promueva los derechos universales. La conferencia fue inaugurada el día 16 por Bart Somers, Alcalde de Malinas; William Swing, Director General de la Organización Internacional para la Migraciones, y Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU.

El alcalde Somers dio la bienvenida a los asistentes a la conferencia señalando que su ciudad ha conseguido “hacer de la diversidad y las personas inmigradas la nueva normalidad”. Por su parte, Swing enfatizó la necesidad de pensar a las personas migrantes “como sujetos de derechos, no como estadísticas, fenómenos u olas”. Sáiz se refirió al derecho a la ciudad como principio guía para la gobernanza de las migraciones en las ciudades y los territorios.

Sesión paralela “Movilidad Humana y Derecho a la Ciudad”

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, junto con la Organización por una Ciudadanía Universal y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad organizó el evento paralelo “Movilidad Humana y Derecho a la Ciudad”

La sesión contó con la participación de **Abdoulaye Thimbo**, Alcalde de Pikine (Senegal); **Amélie Cannone**, de EMMAUS International - Organización por una Ciudadanía Universal (OPCU); **Amina El Oualid**, Vicepresidenta del Consejo Municipal de Nador (Marruecos); **Berta Cao**, responsable de migración y refugio del Ayuntamiento de Madrid; **Joseph Schechla**, de Habitat International Coalition (HIC-HLRN), y **Lola López**, Comisionada de Migraciones e Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona. La sesión contó con un gran número de participantes.

La mesa redonda respondía a los siguientes objetivos

- 1) Arrojar luz sobre *distintas prácticas llevadas a cabo a nivel local* para “santuarizar” el acceso a los derechos universales de los migrantes en el espacio local, en base al diálogo entre responsables locales, investigadores, sociedad civil y sistema de protección de los derechos humanos de la ONU.
- 2) Contribuir a la *emergencia de una voz unida de los gobiernos locales* para una gobernanza global de las migraciones respetuosa con los derechos universales que asocie los gobiernos locales.
- 3) *Reforzar la red de ciudades y sociedad civil* para los derechos universales y el derecho a la ciudad.

Magali Fricaudet, coordinadora de la Comisión y moderadora de la sesión, abrió la conversación recordando que el fenómeno migratorio tiene mucho que ver con la urbanización mundial masiva, que transforma las ciudades, los territorios y las regiones en lugares de vida caracterizados por grados de diversidad y movilidad cada vez mayores.

Si bien una parte de los migrantes dispone de altos niveles de cualificación y son capaces de integrarse rápidamente mediante su inserción en el mercado de trabajo, para la mayoría de ellos la migración es un fenómeno impuesto. Así, la ciudad representa, para muchos, un espacio de supervivencia frente a unas condiciones rurales cada vez más adversas,

a causa de factores como el cambio climático; el abandono de las políticas de desarrollo rural; los procesos de acaparamiento de tierras cultivables, o la competencia desleal para los campesinos del Sur global creada por los acuerdos de libre comercio con países más “competitivos”.

Así, los migrantes se instalan en las ciudades con la esperanza de acceder a una vida más digna y a servicios urbanos en vistas de realizar su derecho a la ciudad; sin embargo, y dada la dificultad del contexto económico, muy a menudo estos sólo logran instalarse en sus márgenes socio-espaciales. Por tanto, la cuestión del acceso a los derechos y al derecho a la ciudad está en el centro de los recorridos migratorios. Los gobiernos locales y regionales, tanto en los territorios de acogida como en los de salida y tránsito, juegan un papel determinante en términos de inclusión social de los migrantes, favoreciendo su acceso a los derechos.



¿Cuáles son las principales vulneraciones de derechos que obligan a las personas a migrar?

¿Qué prácticas permiten garantizar los derechos universales de los migrantes y su participación en el espacio local?

Abdoulaye Thimbo, alcalde de Pikine (área metropolitana de Dakar, en Senegal), destacó las dificultades de urbanización que tiene su ciudad, debido al poco acompañamiento del Estado para acoger una población creciente que no accede al centro de Dakar. Invitó a que los derechos de los migrantes venidos del campo sean trabajados desde la llegada de éstos a través de su inserción en la ciudad. En este sentido, explicó que el ayuntamiento de Pikine, en alianza con una asociación de juristas senegalesas, puso en marcha una “oficina de los derechos” donde pueden acudir las personas que conocen abusos. Esta casa permite trabajar especialmente los derechos de las mujeres víctimas de violaciones y abusos sexuales.

Amélie Cannone, de la ONG francesa EMMAUS International – Organización por una Ciudadanía Universal, señaló los problemas que supone para la gestión de la migración la falta de descentralización real en las ciudades: “obtener recursos es el primer reto para garantizar los derechos de las personas migrantes: las ciudades tienen las competencias de los servicios que sirven para garantizar los derechos fundamentales, pero demasiado a menudo no cuentan con los recursos financieros necesarios”. También destacó que los Estados no consultan a los gobiernos locales a la hora de definir las políticas migratorias. Algunas ciudades se esfuerzan por brindar una acogida y trabajar con la ciudadanía local en este sentido, por lo que resulta necesario valorizar lo que hacen y trabajar en redes con la sociedad civil. Los gobiernos locales traducen los derechos en acción concreta, por lo que resulta más fácil para la sociedad civil dialogar con el nivel local.

Un segundo reto refiere a la cuestión del acceso a los derechos humanos y a los servicios independientemente de la situación administrativa de las personas. Vinculado a esto, subrayó que es necesario hacer frente a los discursos xenófobos para reafirmar que los derechos humanos son universales.

*“Enfocar la realidad migratoria desde el punto de vista **del Derecho a la Ciudad** permite pensar en las necesidades y los derechos de las personas a través de una perspectiva holística: vivienda, ciudadanía, acceso a los servicios...”*

Además, Amélie Canonne reivindicó el vínculo entre las migraciones y el desarrollo territorial sostenible: “en Italia, los municipios urbanos se han coordinado con los municipios rurales para facilitar el acceso a la vivienda en función de las necesidades de trabajo de la tierra agrícola y de las competencias de las personas migrantes”. Enfocar la realidad migratoria desde el punto de vista del derecho a la ciudad permite pensar en las necesidades y los derechos de las personas a través de una perspectiva holística: vivienda, ciudadanía, acceso a los servicios, etc.

Finalmente, concluyó destacando que la indivisibilidad de los derechos humanos debe ser defendida. De cara a la negociación del Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular, es necesario seguir tejiendo alianzas entre la sociedad civil, los gobiernos locales y la academia. Esto facilitará un mejor conocimiento de las realidades territoriales e impulsar una política global alternativa

de garantía de derechos, fundada en las prácticas que ya están teniendo lugar a nivel local.

Según **Joseph Schechla**, de Habitat International Coalition – Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN), “los modelos legales actuales tratan a las personas migrantes y refugiadas como personas en tránsito, no como sujetos de derechos permanentes”. Joseph Schechla abordó el marco jurídico internacional de las migraciones, destacando que los modelos legales que rigen su gobernanza “no son adecuados porque no han sido construidos desde las perspectivas y magnitudes actuales del fenómeno”.



Josep Schechla explicó las prioridades, los retos y las lecciones aprendidas del trabajo realizado por HLRN en la región de Oriente Medio y el Norte de África, y, particularmente, del proyecto “Santuario en la Ciudad: Beirut”. Este proyecto consiste en establecer una carta de garantía de los derechos universales de los migrantes en las ciudades de acogida, especialmente sobre ejes prioridades como el derecho al trabajo, a la atención sanitaria, la educación y la igualdad de género.

Josep Schechla mencionó la “gran prevalencia del matrimonio forzado de menores entre los sectores más pobres de la población, y, especialmente, entre las niñas refugiadas o desplazadas”. La ausencia de legislación que las proteja en algunos países de acogida de la región impide luchar contra este fenómeno, a pesar de las obligaciones internacionales en este sentido.

Lola López, Comisionada de Interculturalidad e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, señaló el trabajo de la ciudad “con la sociedad civil para santuarizar los derechos de las personas migrantes”. Así, presentó las políticas municipales de Barcelona en la materia, poniendo el acento sobre dos aspectos

Mechelen aboga por abrazar la diversidad y luchar contra el racismo

Entrevista con el Alcalde de Mechelen Bart Somers



Fuente: Paul Van Welden

¿Por qué Mechelen decidió acoger esta Conferencia?

Nuestra ciudad se enorgullece de invitar a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional de gobiernos locales porque estamos orgullosos de la ciudad que somos. Nuestra ciudad abraza la diversidad y cree que no es algo malo, sino la nueva normalidad. En este momento, viven en Mechelen personas de hasta 138 nacionalidades diferentes, y, sin embargo, creemos que cada una de estas nacionalidades puede sentir que pertenece a la misma comunidad.

El proceso de integración involucra todos los actores sociales y políticos; todos deben tomar parte de esta nueva realidad que es la diversidad. A pesar de la complejidad, Mechelen ha tenido bastante éxito, por lo que queremos mostrárselo al mundo, especialmente en un momento de mensajes populistas y negativos en torno a la migración. Debemos disponer de ejemplos positivos, y como ciudad pequeña podemos dar esperanza en este momento problemático. Queremos mostrarle al mundo que vivir juntos puede ser exitoso y positivo, porque cuanto más trabajamos en este sentido, vemos que es la realidad.

Si una ciudad abraza la diversidad, la gente se vuelve más rica, más abierta y aprende de los otros. Y te vuelves más fuerte en un mundo globalizado, con muchas más posibilidades de tener éxito.

¿Cómo trabaja Mechelen con los migrantes y la vivencia de la diversidad?

En primer lugar, desearía marcar la diferencia entre recién llegados y descendientes de personas migrantes. Para los recién llegados, nos centramos en hacerles sentir que son bienvenidos. Cuando una persona llega a nuestra ciudad, esta cuenta con un "amigo", una persona establecida en Malinas desde hace ya mucho tiempo que conoce la ciudad. Los dos están juntos durante seis meses, para que el recién llegado pueda aprender el idioma, descubrir la ciudad y encontrar otras personas locales, lo que le permite relacionarse con personas fuera de su entorno original (ya sea en términos de nacionalidad, idioma...).

Al principio, es cierto que teníamos gente que se mostraba un poco reacia con los inmigrantes. Solían decir "son ellos los tienen que adaptarse a nosotros, no al revés". Pero después de un tiempo, la verdad es que la gente empieza a hablar sobre cosas humanas, preguntan "¿cómo te sientes?", por lo que el recién llegado habla sobre su familia o el hogar que él o ella echa de menos, y entonces se vuelven amigos

Con las personas nacidas aquí descendientes de inmigrantes, lo que tratamos de hacer es evitar la segregación. Quiero escuelas donde personas de diferentes orígenes puedan sentarse juntas y tener las mismas oportunidades. Es por eso que, por ejemplo, tratamos de establecer contacto con las familias y los administradores de las escuelas para promover la diversidad en el aula. No puede ser bueno que la realidad de un niño en la escuela no sea el reflejo de lo que será su país en un futuro cercano. Necesitamos entornos más diversos para estimular la discusión en torno a qué es nuestra comunidad. Creo en una ciudad que abarca la diversidad y la convivencia con toda su gente y sus orígenes.

¿Cuál sería su recomendación para el Pacto Global para la Migración?

Las instituciones nacionales y las organizaciones internacionales deben comprender que quienes se encuentran en la primera línea de la política migratoria y tienen actitudes positivas hacia las migraciones son especialmente las ciudades. Por lo tanto, pedimos un acuerdo global que las respalde y les dé los instrumentos para hacer su trabajo. Llamamos a consagrar la idea de que cada persona es única y tiene múltiples identidades. Si debemos explorar cómo construir nuevas comunidades basadas en múltiples identidades, creo que las ciudades son el lugar más adecuado para hacerlo. Al final, se trata de que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales pongan a las ciudades en el centro de las políticas migratorias.

¿Podría hablarnos sobre Nador con respecto a la migración?

Las cifras oficiales no dan una perspectiva muy clara de la situación real. Los migrantes en Nador son conocidos por su movimiento: viven en áreas periféricas o en el bosque, o se van y vuelven de la ciudad vecina de Oujda. Su situación es realmente precaria.

En cuanto al trabajo de las asociaciones dando apoyo a los migrantes, tenemos asociaciones que trabajan para los “MER” - los marroquíes del exterior de vuelta – mientras que otras se dedican a promover un enfoque humano de la migración. Cabe decir, sin embargo, que su número en Nador es aún escaso. En cualquier caso, el municipio acaba de firmar un acuerdo con una asociación local que procura facilitar el acceso de los migrantes al espacio público y para que estos puedan organizar eventos públicos. Así, ya hemos organizado una exposición culinaria, conferencias sobre los derechos humanos de los migrantes y eventos de concienciación sobre la riqueza de la diversidad cultural.

Históricamente, Nador ha sido más bien una ciudad “exportadora” de migrantes. Ahora, esta tendencia ha sido precedida por el tránsito de migrantes del resto de África. En consecuencia, nuestra ciudad conoce ahora tanto la emigración como el tránsito. Con el cierre de la frontera de Melilla, la región ha pasado por un período difícil. Ante la afluencia de migrantes que intentan pasar el alambre de púas que separa los dos territorios, intentamos crear una oficina de recepción para guiar a los inmigrantes hacia programas de educación, servicios de salud o incluso la administración pública.

Emigrar no debería ser un problema, la migración interna podría ser una solución. Pero en nuestra región no tenemos ni trabajos, ni infraestructuras, ni inversiones, ni negocios... La situación en Nador es muy complicada. Además, somos una ciudad fronteriza con Melilla. Las personas que regresan a Melilla ven la diferencia entre Europa y África, los contrastes son increíbles.

¿Por qué es importante para usted asistir a la Conferencia de Ciudades y Migraciones? ¿Qué le puede aportar a Nador y a ciudades con retos parecidos?

La migración es un fenómeno global. En la globalización, todo el mundo va a todas partes, la gente se encuentra. Si no hay fronteras en internet, tampoco debería haber en nuestras mentalidades. Cuando vamos a un foro internacional como el de Mechelen, aprendemos de las experiencias de aquellas ciudades que han puesto en marcha políticas de gestión para hacer frente y acompañar la migración. Conocemos las experiencias de ciudades que viven en la misma situación, han trabajado antes que nosotros sobre este tema y han logrado integrar más o menos a los migrantes y dar a conocer la riqueza de la diversidad.

¿Cuál sería su recomendación para el Pacto Global para la Migración?

Una demanda clave es el desarrollo socioeconómico de las regiones de origen de los migrantes. No podemos comportarnos con todas las ciudades de la misma manera, porque cada ciudad y cada país tiene su propia especificidad. Entonces, cuando hablamos de una ciudad como Nador, me gustaría que hablemos sobre el desarrollo económico de la región. Para el Pacto, también es necesario insistir en la necesidad de territorializar las estrategias nacionales de migración, aún demasiado centralizadas.

Debemos luchar contra el racismo. Creo que también deberíamos hablar sobre la capacitación profesional y el apoyo pedagógico para los inmigrantes. Es el mismo caso que sobre la participación de los migrantes en este proceso: en Nador, queremos integrarlos en nuestro pacto de acción local. Finalmente, me gustaría alentar la participación de las mujeres en la creación de riqueza y su emprendimiento en relación con este tema.

Nador: una ciudad atravesada por las rutas migratorias que trabaja por los derechos universales

Entrevista con la Vice-Presidenta del Consejo Municipal de Nador Amina El Oualid



Por un lado, la necesidad de reenfocar el concepto de ciudadanía, centrándolo en la residencia en vez de la nacionalidad. López explicó que “para Barcelona, el padrón es especialmente importante, puesto que se trata de la puerta de entrada a la mayoría de servicios. La ciudad ha de ser una ciudad-refugio que no permita la expulsión de sus habitantes: por ello, hemos presentado un documento de vecindad que certifique la residencia de todos los vecinos”. El ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un servicio de atención integral a migrantes y refugiados, que brinda un apoyo legal y lingüístico.

Por otro lado, la Comisionada también explicó que la política de interculturalidad de Barcelona tiene por objetivo “construir ciudadanía desde la diversidad para que todas las personas puedan ser parte de la comunidad sin tener que renunciar a su identidad”. Por ello, el Ayuntamiento ha aprobado un Plan de Interculturalidad que se fundamenta en tres principios: la igualdad en el acceso a los derechos y la igualdad de oportunidades; el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa de la ciudad, y la promoción del diálogo entre las distintas personas y comunidades que viven en Barcelona.

Finalmente, López explicó que, en el caso español, la ley de extranjería estatal limita mucho el marco de acción de los gobiernos locales para implementar políticas de acogida de las personas migrantes.



Berta Cao, responsable para la migración y el refugio del Ayuntamiento de Madrid abundó en el mismo tema, anotando como “las ciudades no tienen las competencias necesarias para incidir en las condiciones estructurales de la migración (...) nuestras posibilidades de intervención no son directas, sino que se centran en el trabajo con las organizaciones locales”.

Cao recordó que las políticas anteriores del Ayuntamiento de Madrid estaban centradas en el ámbito de la seguridad. Cambiar de enfoque, pues, requiere un trabajo constante de “sensibilización de la ciudadanía, para que los recién llegados sean vistos como vecinos, con los mismos derechos”.

En este contexto, “se están estableciendo complicidades con redes municipales tanto a nivel español como internacional para encontrar espacios comunes y compartir experiencias”.

¿Cómo lograr una garantía universal de los derechos humanos y el derecho a la ciudad?

¿Qué papel para las redes de ciudades?

¿Cómo establecer redes de solidaridad y de apoyo entre ciudades de salida y de acogida para permitir una mejor protección de los migrantes y de sus familias, así como un desarrollo compartido entre territorios?

El **alcalde Thimbo** insistió en el rol de los territorios de periferia en los flujos migratorios, puesto que son estos territorios los que acogen más migrantes. En este ámbito, destacó el trabajo que realiza la red de ciudades periféricas FALP. El alcalde también subrayó la importancia de la cooperación descentralizada para promover un desarrollo territorial sostenible y para garantizar los derechos de las personas migrantes. Además, puso énfasis en la necesidad de que la cooperación implique un intercambio de conocimientos, pero también la profundización y el aprendizaje inter-culturales vinculado a experiencias personales de los migrantes.

Así, por ejemplo, la colaboración entre Pikine y Nanterre, dos ciudades de la red FALP, ha permitido desarrollar proyectos de acompañamiento de actividades generadoras de rentas para las mujeres de la ciudad. En Pikine, es especialmente relevante invertir en la economía local, puesto que la ciudad cuenta con un índice de desempleo del 30%. La cooperación descentralizada puede ser una palanca importante para ello. También explicó que la asociación con una ONG italiana permitió obtener financiación para un proyecto de sensibilización acerca de los riesgos relacionados con las migraciones clandestinas.

Estas experiencias muestran que desde el intercambio cultural es posible crear espacios para hilar la relación entre los territorios de origen y los de acogida, desde los cuales poder contribuir al desarrollo territorial de las comunidades.

Para **Amina El Oualid**, Vice-Presidenta del Consejo Municipal de Nador, “el trabajo con la sociedad civil para sensibilizar a la población es clave para que las personas migrantes sean vistas como titulares de derechos”. La ciudad de Nador, a pesar de tener recursos muy limitados ha establecido un plan de acción comunal que prevé acciones multiculturales, deportivas y sociales para la inclusión de las personas migrantes. En especial, el plan se basa en el trabajo con la sociedad civil sobre el acceso a los derechos – en particular, a la salud de los migrantes – y para la sensibilización de la población sobre las discriminaciones. Para realizar estas acciones la ciudad de Nador cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Marruecos.

“El trabajo con la sociedad civil para sensibilizar a la población es clave para que las personas migrantes sean vistas como titulares de derechos”

La ciudad de Nador, fronteriza con Melilla, es un territorio de paso por el que transitan migrantes que intentan llegar a Europa. La vicepresidenta comparó esta frontera con una herida en el terreno de África. Además, El Oualid explicó que el gobierno de la ciudad busca implementar políticas para favorecer las oportunidades – ya de por sí difíciles – de los jóvenes en Nador y la mejora del acceso universal a los derechos sociales. En este contexto, destacó el trabajo hecho con las asociaciones para sensibilizar a la población local acerca de los derechos de las personas migrantes: “en Marruecos, buena parte de las familias cuentan con personas que han migrado, pero la sociedad marroquí todavía es reacia a las personas extranjeras. Por esto es importante sensibilizar a la población.

¿En qué consiste el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular?

¿Cómo defender un enfoque de derechos humanos desde las alianzas entre sociedad civil y gobiernos locales?

Según **Solène Bedaux**, responsable de la cuestión migratoria en el área de Incidencia Internacional de Caritas Francia, el Pacto Global podría inducir más controles en las fronteras y fortalecer la cooperación en materia de regreso de los migrantes y de readmisión por los Estados.

El proceso de elaboración del acuerdo se organiza alrededor de seis sesiones temáticas. En diciembre, en Puerto Vallarta, se presentará el Zero Draft. Sin embargo, los Estados han dejado poco espacio para

la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales. Es en este contexto que Cáritas intenta llevar la voz de los migrantes en la negociación del Pacto. En febrero, se organizará un encuentro para llevar las demandas políticas de la sociedad civil, desarrollando otra narrativa con respecto de las políticas actuales que tienen repercusiones muy violentas: por ejemplo, 6000 menores refugiados y migrantes desaparecieron en Alemania en 2015. La sociedad civil quiere participar en este proceso y defender una visión respetuosa con los derechos.



En seguimiento de esta mesa redonda, los participantes al evento tomaron la palabra.

Para **Issoufou Ganou**, Secretario Ejecutivo del Observatorio del Suelo de Burkina Faso, es necesario pensar la cuestión de los derechos desde los territorios, estudiando la relación entre territorios de una misma región o área metropolitana y entre territorios rurales y urbanos. Es especialmente importante hacer frente al reto de la escasez de vivienda y de suelo, por lo que resulta importante valorizar el suelo con nuevas instalaciones en algunos territorios, y así crear empleo y revitalizar los servicios públicos locales.

Ganou también destacó la importancia de trabajar sobre las formas de atribución de la tierra para garantizar el derecho a la ciudad. En efecto, en las ciudades africanas, la gente suele ocupar parcelas de tierra. Por otro lado, 30% de las tierras urbanas son sin construir en las ciudades, lo que alimenta una gran especulación sobre el suelo y provoca la expulsión de los que llegan a las ciudades aún más lejos. Por tanto, trabajar el derecho a la ciudad es pensar verdaderas políticas de vivienda más que de parcelación, anotando como “las personas necesitan acompañamiento para facilitar la realización de su derecho a la vivienda mediante la toma de conciencia de lo que son sus propios derechos”.

Finalmente, añadió que “la cooperación descentralizada ha sido catalizadora de entusiasmo y ha mejorado el acompañamiento a personas migrantes”. Explicó que Uagadugú tuvo una experiencia de cooperación descentralizada con Oudel (Francia), que articuló una asociación local con un grupo de campesinos.

El representante del gobierno de Palma de Mallorca, **Aligi Molina**, puso énfasis en compartir prácticas locales que puedan ser útiles para ciudades de todos los tamaños. Como ejemplo de ello, identificó “la implicación de la sociedad civil (especialmente vecinos y asociaciones de personas inmigradas) para que formen parte de una estrategia integral contra la xenofobia y el racismo”. En este sentido, Palma, puso en marcha servicios de acompañamiento a las víctimas de los abusos que han interpuesto denuncias que cuentan con la implicación de las personas migradas y de las organizaciones locales.

Finalmente, **Emilia Sáiz**, Secretaria General de CGLU, concluyó enfatizando la necesidad de extraer ideas concretas de la sesión. “Algunas de las cosas que se han mencionado han de encontrar el camino para formar parte de las declaraciones globales. Para ello, es necesario que exista un liderazgo fuerte de gobiernos locales y regionales que puedan defender una visión de las personas migrantes y refugiadas basada en un enfoque de derechos y no desde una perspectiva humanitaria. Es necesario también que, como organización de representación de los gobiernos locales a nivel mundial, en CGLU podamos definir mensajes comunes que asumamos juntos después”.



Sesión paralela “Derechos Humanos de las personas migrantes”

Magali Fricaudet, como coordinadora de la Comisión, co-facilitó la sesión “Derechos Humanos de las Personas Migrantes”, junto con la Secretaria de Derechos Humanos de São Paulo, Eloísa Arruda. El panel tuvo por objetivo analizar las vulnerabilidades a que se exponen las personas migrantes y las violaciones de derechos humanos que resultan de las mismas, así como identificar prácticas de garantía de derechos que se estén llevando a cabo a nivel local en ciudades y territorios de todo mundo.

La sesión contó con la participación de Juan Acevedo, Alcalde de Upala (Costa Rica); Abdoulaye Thimbo, Alcalde de Pikine (Senegal); Kalgso Clavin Thutlwe, Alcalde de Gaborone (Botswana); Gustavo Baroja, Prefecto de Pichincha (Ecuador); Glenda Ovalle, de la Asociación de Municipalidades de la Metrópolis de Los Altos (Guatemala); Amina El Oualid, Vicepresidenta del Consejo Regional de Nador (Marruecos); Berta Cao, responsable de migración y refugio del Ayuntamiento de Madrid (España), y Eleftherios Papagiannakis, Vice-alcalde de Atenas para los Migrantes y Refugiados y la Descentralización Municipal.

Uno de los principales mensajes lanzados en la mesa redonda fue que la clave de la inclusión de las personas migrantes es su reconocimiento como sujetos de derechos. Para ello, algunos gobiernos locales alrededor del mundo han elaborado tarjetas de identidad locales que aseguren el acceso de todos los habitantes a los

servicios públicos, independientemente de su estatus administrativo. Otros, como en Sao Paulo han establecido consejos municipales de migrantes.

Así, **Eloísa Arruda**, Secretaria de Derechos Humanos de São Paulo afirmó que “São Paulo es una ciudad de 12 millones de habitantes que ha sido construida por migrantes. El reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos es clave para la inclusión, y esto pasa por su participación en la gobernanza”. La Secretaria también se refirió a la necesidad de trabajar para establecer un sistema multilateral de reconocimiento de diplomas académicos a nivel internacional, con el objetivo de agilizar el acceso a empleo cualificado en el país de acogida.

Por su parte, **Juan Acevedo**, alcalde de Upala (Costa Rica), defendió que “las personas que llegan son ante todo habitantes que deben tener acceso a todos los servicios”. Upala es un cantón fronterizo con Nicaragua, con una parte de la población que trabaja en el lado de la frontera opuesto al que vive. Han contado con el apoyo de la Organización Internacional de Migraciones para que el gobierno nacional aplique una política migratoria adecuada para su caso, lo que ha dado lugar al establecimiento de tarjetas de identificación de vecinos transfronterizos. Esta credencial permite que este colectivo deje de ser considerado como personas migrantes y pasen a ser vecinos y vecinas con acceso a todos los servicios.

En el ámbito laboral, que fue considerado otro de los vectores de la inclusión de las personas migrantes, en Upala han logrado que el código de trabajo se aplique tanto a migrantes regulares como irregulares, y también han desarrollado un programa de micro-emprendimiento para facilitar el acceso al trabajo a los jóvenes. Además, desde el gobierno de la ciudad se han aplicado políticas de protección de los colectivos más vulnerables entre los migrantes. Ejemplo de ello es la “Casa de los derechos de las mujeres migrantes”, enfocada proveer apoyo a las jóvenes y adultas migrantes.

Otra cuestión relevante en la conversación fue la importancia de promover una ciudadanía de residencia y no de nacionalidad. En este sentido, **Berta Cao**, representante del Ayuntamiento de Madrid, explicó la ciudad ha aprobado un plan de derechos humanos y está elaborando la estrategia “Madrid, Ciudad de Acogida” para habilitar y facilitar el acceso de todos los vecinos a los servicios municipales a través de una tarjeta de identidad local. Además, se han instalado albergues para personas en tránsito, y, para combatir la discriminación, se ha implantado una unidad

de gestión de la diversidad en la policía local para sensibilizar a este cuerpo de seguridad.

En la cuestión de la lucha contra las discriminaciones abundó el alcalde **Kaliso Gallo Thutlwe** de Gaborone (Botswana): “La igualdad y la equidad son nuestros ejes principales en la acogida de migrantes, y aplicamos políticas de acción afirmativa para ello”. El compromiso de Gaborone con los derechos de los migrantes y contra las discriminaciones viene de lejos: en tiempos del apartheid en Sudáfrica, la ciudad acogió a la resistencia de Mandela y Congreso Nacional Africano. A nivel nacional existen políticas de acción afirmativa en relación a las personas migrantes, partiendo del convencimiento que los migrantes impactan positivamente en las ciudades. En especial, la ciudad facilita el acceso de niños, niñas y mujeres a la educación.

También fue central en conversación la idea que, en muchas ocasiones, las ciudades no solo sirven como punto de partida o de llegada de migrantes: las ciudades de emigración lo son de inmigración y de tránsito. Por tanto, es necesario desarrollar una visión integral de las migraciones y del migrante como un sujeto político global. **Gustavo Baroja**, Prefecto de Pichincha (región de Ecuador), se refirió a la historia de su país: Ecuador desde los años cincuenta hasta recientemente fue un país de emigración, exportador de mano de obra, con centenas de miles de ecuatorianos dejando el país. Ahora Ecuador es un sitio de destino y de paso. El gobierno, en el marco del plan nacional de Buen Vivir regularizó a 100 000 personas, para conferirles la ciudadanía universal y respetar el principio de libre movilidad y de no devolución en este contexto, garantizado por la declaración universal de derechos humanos. En este sentido, Baroja destacó la importancia de las colaboraciones con las universidades para el desarrollo de investigaciones sobre migrantes como sujetos de derechos globales.

Por otra parte, la vuelta al país de los migrantes que llegan a la provincia de Pichincha tiene que ser asumida por la región, sin ser ésta competente para trabajar en su reinserción en la sociedad ecuatoriana. Baroja se refirió también a la necesidad de pensar la movilidad internacional desde un enfoque global, pero también desde la perspectiva del trabajo social que se requiere hacer, especialmente en términos familiares.

Sobre este tema abundó **Glenda Ovalle**, de la Asociación de Municipalidades de la Metrópolis de Los Altos (Guatemala), que puso énfasis en la relevancia

de las consecuencias de la desunión familiar. En este sentido, pidió recursos y competencias para el acompañamiento emocional y personal, especialmente a los niños y mujeres que se van o se quedan solos o solas. Ovalle destacó la importancia de brindar una protección especial a estos colectivos – de los más vulnerables en los procesos migratorios.

En el marco de la necesidad de poner el foco en los colectivos más vulnerables, **Amina El Oualid** puso como ejemplo la estrategia para las migraciones y los derechos de los migrantes impulsada por el Consejo de Nador con el apoyo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. El Oualid puso el acento en la urgencia de un enfoque humano y global en las políticas migratorias, que se traduzca en una cooperación multilateral basada en las responsabilidades compartidas entre ciudades de partida y de acogida, en el respeto a los derechos humanos y en el cumplimiento del derecho internacional, con especial atención en las vulnerabilidades de las mujeres migrantes. Así, El Oualid explicó que Nador está generando espacios comunes a nivel de ciudad para el intercambio cultural, y trabaja para insertar el Consejo de la ciudad en redes internacionales que faciliten el aprendizaje a través de intercambios de conocimientos y buenas prácticas.

En este mismo sentido se expresó el alcalde de Pikine, **Abdoulaye Thimbo**, quien destacó la relación de cooperación descentralizada con Nanterre, que se ha basado en el desarrollo de vínculos fuertes y personales, no sólo en el intercambio de experiencias y prácticas. Así, destacó la vinculación y las responsabilidades compartidas entre la ciudad de salida y la de llegada, expresada en términos de solidaridad internacional.

“En momentos de crisis, los derechos humanos son los primeros en caer: las medidas de austeridad hacen muy difícil preservar la cohesión social”

Finalmente, otro elemento destacado fue la – a veces complicada – relación entre gobiernos locales y nacionales, especialmente en relación a la alineación de objetivos de las políticas de acogida de migrantes entre ambos niveles. También se mencionó de forma recurrente la falta de recursos para financiar las políticas de garantía de derechos humanos de las personas migrantes, en particular en contextos de austeridad presupuestaria impuesta por el gobierno nacional. Así, **Eleftherios Papagiannakis**, Teniente de alcalde de Atenas para los Migrantes, los Refugiados y la Descentralización, afirmó que “en momentos de crisis, los derechos humanos son los primeros en caer: las medidas de austeridad hacen muy difícil preservar la cohesión social”.

En suma, los participantes destacaron la importancia de pensar las migraciones a la luz del contexto macro-económico global en el que la ciudad pasa a ser la única posibilidad para muchos campesinos afectados por el cambio climático, el acaparamiento de tierras arables o los tratados de libre-cambio. En este marco, se recordó que el derecho a la ciudad no es la obligación de la ciudad, sino que parte de una relación equilibrada y sostenible con el entorno rural. Por otra parte, los participantes recordaron que los gobiernos locales tienen un papel determinante para hilar la relación entre los territorios de origen y los de acogida, desde los cuales poder contribuir al desarrollo territorial de las comunidades a través de la cooperación descentralizada.

También se reafirmó la necesidad de enfocar las migraciones globales en el marco del derecho a la ciudad, como herramienta necesaria para la construcción de una ciudadanía local efectiva de las personas migrantes haciendo hincapié en los colectivos más marginados como las mujeres y los jóvenes menores a los cuales es necesario aportar una protección especial. El conjunto de los participantes, tanto gobiernos locales como sociedad civil, marcaron su voluntad de trabajar para acoger a los migrantes, a pesar de las múltiples dificultades generadas por la escasez de recursos, el desarrollo de discursos xenófobos. Lo hicieron conscientes de que, hoy en día, una gestión sostenible de los territorios no puede sino basarse en acciones enfocadas a reconocer las diversidades y restablecer la igualdad.